



Escrito por:
[Allan Brown](#)



[ENTREVISTA](#) [CHILE](#) [INFRAESTRUCTURA](#) [TIC](#) [ENERGÍA ELÉCTRICA](#)
[MINERÍA Y METALES](#) [PETRÓLEO Y GAS](#) [AGUAS Y RESIDUOS](#)
[RIESGO POLÍTICO Y MACROECONOMÍA](#)

Chile retoma la senda de la estabilidad tributaria: ¿qué propone el gobierno de Kast para los inversores?

Publicado : 28/05/2026

[Impuestos y Subsidios](#) [Política](#) [Problemas jurídicos / Asesoría Legal](#) [Legislación y regulación](#) [Inversión Privada](#)



Una norma legal que ayudó a destrabar miles de millones de dólares de inversión extranjera en Chile durante décadas – el decreto ley DL 600 – fue derogada en 2016.

El marco vigente hoy comprende múltiples componentes, incluida la ley N° 20.848, con la agencia de promoción de la inversión extranjera InvestChile desempeñando un papel central.

El gobierno del presidente José Antonio Kast, como parte de su proyecto de ley de reconstrucción nacional que fue presentado recientemente al congreso, ha propuesto un nuevo régimen de estabilidad tributaria.

Para trazar el panorama y analizar las nuevas medidas propuestas, BNamericas habló con la socia Carolina Fuensalida y el asociado senior Diego Fuensalida del estudio jurídico chileno Fuensalida & Del Valle.

BNamericas: ¿Cómo ha sido la aplicación del DL 600, que consagró la invariabilidad tributaria para inversionistas extranjeros en Chile?

Carolina Fuensalida: Vale la pena recordar que el DL 600 - Estatuto de Inversión Extranjera- fue creado en 1974 y derogado a partir de 2016 en el segundo gobierno de la Presidenta [Michelle] Bachelet.

Establecía normas para la protección y promoción de la inversión extranjera, a través de la celebración de contratos entre el Estado e inversionistas foráneos, en los que Chile principalmente comprometía estabilidad jurídica e invariabilidad tributaria. Esto permitió atraer importantes flujos de capital, que finalmente fueron el impulso definitivo de la minería en Chile.

En la práctica, el régimen de invariabilidad implicaba que el inversionista podía acogerse a una tasa de 42% como carga impositiva efectiva total a la renta por un plazo de 10 años contado desde la puesta en marcha de la empresa. Este beneficio podía extenderse hasta 20 años.

Bajo su vigencia, de acuerdo con un estudio efectuado en el año 2010 por una comisión que se designó al efecto ese mismo año -y en la que me tocó participar como secretaria adjunta-, en el periodo entre 1974 a 2010, se habían materializado en Chile US\$ 77.261 millones a través del DL 600, lo que representa un 62,7% del total de ingresos brutos de capitales a Chile.

BNamericas: ¿Qué tipo de beneficios para inversionistas extranjeros existe hoy en Chile?

Diego Fuensalida: Tras la derogación del DL 600, el marco vigente sobre esta materia descansa, entre otros, en la Ley N°20.848 de 2015. Esta ley define la inversión extranjera directa como una transferencia desde el exterior de al menos US\$5 millones que otorgue control del 10% o más de una empresa chilena. Los inversionistas certificados por [InvestChile](#) -agencia pública de promoción de inversiones extranjera directa- acceden a garantías como el acceso al mercado cambiario formal para liquidar divisas, remesa de capital y utilidades al exterior una vez cumplidas las obligaciones tributarias, así como la posibilidad de solicitar exención del IVA en la importación de bienes de capital. Adicionalmente, pueden obtener el Certificado de Inversionista Extranjero, que permite acceder a ciertas garantías legales.

Para los efectos anteriores, se han identificado cinco sectores prioritarios para la atracción de inversiones: servicios de la industria minera, la industria alimentaria sofisticada, servicios tecnológicos exportables, el turismo sostenible y la infraestructura energética/logística. Las inversiones de al menos US\$5 millones están exentas del IVA sobre importaciones de bienes de capital para siete

tipos de proyectos: minería, industria, sector forestal, energía, infraestructura, telecomunicaciones e I&D.

Además, Chile ofrece formas de protección desde su red de tratados internacionales bilaterales y multilaterales con 29 países. Sin embargo, la invariabilidad tributaria como tal —el elemento más potente del DL 600— ya no existe en el ordenamiento vigente.

Finalmente, en Chile contamos con normativa cambiaria como el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, que garantiza el acceso al Mercado Cambiario Formal.

BNamericas: Entre las principales medidas del proyecto de ley de reconstrucción nacional es la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US\$50 millones. ¿Por qué sería de interés una nueva ley de invariabilidad tributaria?

Diego Fuensalida: La invariabilidad tributaria contribuiría en gran medida a reactivar la economía chilena, apuntando a incentivar el ingreso de capitales extranjeros. Al respecto, conviene tener presente que, según un estudio del FMI, realizado en junio de 2025, en la década de los noventa la economía chilena crecía a una tasa anual promedio de 6,2% anual, para luego estancarse hacia el 2020 en torno al 2%.

Al respecto, la experiencia internacional ha demostrado que, a mayor seguridad, confiabilidad y estabilidad jurídica, mayor y más duradera es la inversión de capital extranjero. Esto es especialmente relevante para proyectos que requieren de alta inversión y largos plazos. Por su envergadura, estos proyectos atraviesan por diversas etapas de desarrollo que requieren mayor tiempo para ser ejecutados, pudiendo abarcar más de un gobierno, por lo que es fundamental que exista un régimen que le dé certeza tributaria al inversionista extranjero.

Desde un punto de vista histórico, hemos visto que la invariabilidad tributaria fue para Chile un instrumento necesario -distinto de aquellos que existen en la actualidad-, y que constituyó un pilar fundamental del desarrollo económico de los años 80 y 90.

Carolina Fuensalida: En definitiva, si se quiere reactivar la economía y dinamizar la inversión se necesitan mecanismos que ofrezcan la seguridad jurídica que países como Chile necesitan, sobre todo

cuando han experimentado un estancamiento económico y quieren reencantar o revigorizar la inversión. Al mismo tiempo, la invariabilidad también se plantea como la necesidad de ofrecer credibilidad a quienes deciden apostar por nuestro país, máxime si en los últimos 15 años hemos visto intentos sucesivos de reformas tributarias con cambios estructurales y profundos; hemos sido testigos de procesos de reformas constitucionales; hemos observado propuestas de royalties sobre diversos sectores económicos, etc. Si bien fueron rechazados todos en su mayoría, han ido afectando la necesidad de certeza que requiere un inversionista para poder invertir con seguridad y confianza.

BNamericas: ¿Qué debe considerar una nueva ley? ¿Cómo lograr neutralidad fiscal? ¿Fue un error derogar el DL 600?

Carolina Fuensalida: Si se analiza el contexto internacional, se puede verificar que, en general, un nuevo estatuto de invariabilidad debiera cumplir ciertos patrones relevantes: focalización sectorial explícita hacia sectores que se estiman estratégicos para vigorizar la economía chilena, y un alcance material, claramente muy estructurado, de la invariabilidad que se va a otorgar, que evite discusiones jurídico/constitucionales.

Algo interesante de evaluar es el plazo de la invariabilidad, que podría depender de los sectores y tipos de proyectos que se busquen promover. En efecto, y a modo de ejemplo, uno de los indicadores más utilizados para calibrar esto es el tiempo que tarda un proyecto en recuperar la inversión inicial a través de sus flujos de caja. También parece importante que la invariabilidad se ofrezca a proyectos de alta cuantía y en ese sentido podría evaluarse de una manera más empírica cuál es la cuantía mínima que amerita esta protección especial.

Un defecto identificado en el DL 600 original fue que establecía una invariabilidad tributaria a una tasa del 42%, mientras que en la práctica los inversionistas extranjeros estaban sujetos a una tasa máxima del 35%. La nueva propuesta busca corregir esto, estableciendo que los inversionistas quedarán acogidos a la normativa vigente a la fecha de celebración del contrato (tasa, base y demás elementos).

Con respecto a la neutralidad fiscal, existe experiencia comparada que sugiere que la contraprestación -un recargo o prima por acceder a este régimen, como ocurre en Perú- es un mecanismo que permitiría

teóricamente una compensación para que la invariabilidad sea fiscalmente neutra. Sin embargo, es probable que una medida de dicha naturaleza reste el atractivo que se requiere en la actualidad para capturar inversión nueva y de largo plazo.

Pareciera ser que la evidencia, no única, pero sumada a diversos factores históricos, nos ha ido mostrando que derogar el DL 600 fue un error, básicamente porque Chile apostó a una prosperidad y estabilidad que no se mantuvo en el tiempo. En su minuto un informe del Consejo Minero (asociación gremial que reúne a grandes mineras) alertó que la derogación generaba desventajas competitivas para Chile frente a países como Perú, Colombia, Sudáfrica, Canadá, Indonesia, Australia y Estados Unidos en la captación de inversión extranjera minera. Además, los inversionistas extranjeros perdieron el recurso administrativo de reclamación por discriminación, que contemplaba el DL 600.

Sin embargo, esa derogación, unida a cierta inestabilidad institucional que se fue instalando con el tiempo, más especialmente en los últimos 5 años, hacen pensar que en la actualidad un estatuto de invariabilidad puede ser un instrumento relevante para ofrecer la seguridad jurídica que se necesita reinstalar.

BNamericas: ¿Qué tipo de sectores se debería privilegiar?, ¿cuáles deberían ser los plazos?

Diego Fuensalida: Si se mira a nivel comparado, probablemente se concluye que los sectores de infraestructura, la minería, el turismo, la tecnología, la siderurgia, energía y otras industrias de recursos naturales como petróleo y gas han sido elegibles para un estatuto de invariabilidad.

Para Chile en particular, los sectores con mayor justificación para recibir invariabilidad debieran ser minería (especialmente cobre y litio), energía renovable, infraestructura de largo plazo, tecnología y manufactura avanzada.

Carolina Fuensalida: Tal como hemos señalado antes, no es descartable que pudiesen establecerse plazos diferenciados al hacer un análisis acabado de la necesidad y características de diversas industrias o sectores que se quieren abarcar.

La nueva propuesta del gobierno ofrece invariabilidad de la tasa del 35% del Impuesto Adicional por un período de 25 años a todo proyecto de inversión, sin especificar su destino sectorial, que supere los US\$50 millones.

Al parecer, esa ausencia de diferenciación sectorial y la uniformidad del plazo han sido objeto de mayores discusiones, puesto que se ha sostenido que un plazo de 25 años sin distinción de sectores puede resultar excesivo para algunos rubros y necesario para otros. No obstante lo anterior, en este sentido la ley podría establecer, por ejemplo, un máximo de 3 categorías de plazo y no dejar abierta esa discusión ni entregada la definición a normas reglamentarias. Mientras más claras, simples y objetivas sean las normas, más eficiente será el instrumento.

Al final del día, el nuevo estatuto de invariabilidad debe buscar atraer a un inversionista que necesita encontrar en Chile reglas claras, objetivas, simples, estables y predecibles para poder apostar con ciertos grados de tranquilidad en que, cualquiera que sea el gobierno que venga, su inversión se encontrará resguardada de discusiones tributarias permanentes, de posibles restricciones cambiarias e incluso de posibles propuestas de modificaciones constitucionales radicales.

(La versión original de este contenido fue escrita en español)

Acerca de InvestChile

InvestChile es el organismo público que promueve a Chile como destino de inversión extranjera directa en el mercado global, conectando los intereses de los inversionistas foráneos con las oportunidades de negocios que el país ofrece. Brinda servicios especializados, gratuitos y en línea con las políticas de desarrollo económico del país.

La compañía desarrolla todo tipo de iniciativas para informar, promocionar, coordinar e incentivar el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED) al país, además de proveer información general acerca de Chile, su ambiente económico y social, su marco legal y sus políticas en materia de inversión extranjera, brindando información específica



Written by:
[Allan Brown](#)



[Q&A](#) [CHILE](#) [ELECTRIC POWER](#) [WATER & WASTE](#) [ICT](#)
[POLITICAL RISK & MACRO](#) [INFRASTRUCTURE](#) [OIL & GAS](#) [MINING & METALS](#)

Mapping out Chile's investment incentive landscape – and what's proposed

Published : 05/28/2026

[Taxes & Subsidies](#) [Politics](#) [Legal issues / Legal Advice](#) [Legislation & Regulation](#) [Private Investment](#)



A legal norm that helped unlock billions of dollars of foreign investment in Chile for decades – decree law DL 600 – was scrapped in 2016.

Today's framework comprises multiple components, including law No. 20,848, with foreign investment promotion agency InvestChile playing a central role.

The government of President José Antonio Kast, as part of its national reconstruction bill which was recently presented to congress, has proposed a new tax-stability regime.

To map out the landscape and discuss the proposed new measures, BNamericas spoke to partner Carolina Fuensalida and senior associate Diego Fuensalida from Chilean law firm Fuensalida & Del Valle.

BNamericas: How has the application of DL 600, which established tax invariability for foreign investors in Chile, evolved?

Carolina Fuensalida: It is worth recalling that DL 600 – the Foreign Investment Statute – was created in 1974 and repealed in 2016 during President [Michelle] Bachelet's second administration. It established rules for the protection and promotion of foreign investment through contracts between the state and foreign investors, under which Chile mainly guaranteed legal stability and tax invariability. This made it possible to attract significant capital inflows, which ultimately provided the decisive boost for mining in Chile.

In practice, the tax invariability regime meant that investors could opt for a 42% effective total income tax burden for a period of 10 years starting from the launch of operations. This benefit could be extended to up to 20 years.

During its validity, according to a study conducted in 2010 by a commission appointed for that purpose the same year – in which I participated as deputy secretary – investments totaling US\$77.261bn were materialized in Chile through DL 600 between 1974 and 2010, representing 62.7% of total gross capital inflows into Chile.

BNamericas: What kinds of benefits currently exist for foreign investors in Chile?

Diego Fuensalida: Following the repeal of DL 600, the current framework governing this matter is based, among other regulations, on Law No. 20,848 of 2015. This law defines foreign direct investment as a transfer from abroad of at least US\$5mn that grants control of 10% or more of a Chilean company. Investors certified by InvestChile – the public agency promoting foreign direct investment – gain access to guarantees such as access to the formal foreign exchange market to liquidate currency, remittance of capital and profits abroad once tax obligations are met, as well as the possibility of requesting VAT exemption on imports of capital goods. Additionally, they may obtain the Foreign Investor Certificate, which grants access to certain legal guarantees.

For these purposes, five priority sectors have been identified for attracting investment: mining industry services, sophisticated food industry, exportable technology services, sustainable tourism and energy/logistics infrastructure. Investments of at least US\$5mn are exempt from VAT on imports of capital goods for seven types of projects: mining, industry, forestry, energy, infrastructure, telecommunications and R&D.

In addition, Chile offers protection through its network of bilateral and multilateral international treaties with 29 countries. However, tax invariability as such – the strongest element of DL 600 – no longer exists under the current legal framework.

Finally, Chile has foreign exchange regulations such as Chapter XIV of the Central Bank's Compendium of International exchange regulations,

which guarantees access to the formal exchange market.

BNamericas: One of the main measures in the [national reconstruction bill](#) is 25-year tax invariability for investments exceeding US\$50mn. Why would a new tax invariability law be of interest?

Diego Fuensalida: Tax invariability would contribute significantly to reactivating the Chilean economy, aimed at encouraging the inflow of foreign capital. In this regard, it is worth bearing in mind that, according to an IMF study conducted in June 2025, Chile's economy grew at an average annual rate of 6.2% during the 1990s, before stagnating around 2% by 2020.

International experience has shown that the greater the legal certainty, reliability and stability, the greater and more durable foreign capital investment becomes. This is especially relevant for projects requiring high investment and long timelines. Due to their scale, such projects go through multiple development stages that require more time for execution and may span more than one government administration, making it essential to have a regime that provides tax certainty to foreign investors.

From a historical perspective, we have seen that tax invariability was for Chile a necessary instrument – different from those that currently exist – and that it constituted a fundamental pillar of economic development during the 1980s and 1990s.

Carolina Fuensalida: Ultimately, if the objective is to reactivate the economy and stimulate investment, mechanisms are needed that provide the legal certainty countries such as Chile require, especially after experiencing economic stagnation and seeking to rekindle or revitalize investment. At the same time, invariability is also viewed as a way to offer credibility to those deciding to bet on our country, particularly considering that over the last 15 years we have seen successive attempts at tax reforms involving deep structural changes; constitutional reform processes; proposals for royalties on various economic sectors; and so on. Although most were rejected, they have affected the degree of certainty investors require to invest with confidence and security.

BNamericas: What should a new law consider? How can fiscal neutrality be achieved? Was repealing DL 600 a mistake?

Carolina Fuensalida: If one analyzes the international context, it becomes clear that, generally speaking, a new invariability statute should meet certain relevant criteria: explicit sector targeting toward sectors considered strategic for revitalizing Chile's economy, and a clearly structured material scope for the invariability to be granted, avoiding legal and constitutional disputes.

An interesting point to evaluate is the duration of invariability, which could depend on the sectors and project types being promoted. One of the most commonly used indicators to calibrate this is the time a project takes to recover the initial investment through cash flow generation. It also seems important that invariability be offered to large-scale projects and, in that sense, a more empirical assessment could determine the minimum investment threshold warranting such special protection.

One flaw identified in the original DL 600 was that it established tax invariability at a 42% rate, while in practice foreign investors were subject to a maximum rate of 35%. The new proposal seeks to correct this by establishing that investors will be subject to the regulations in force at the time the contract is signed, including the applicable rate, tax base and other elements.

With respect to fiscal neutrality, comparative experience suggests that compensation mechanisms – such as a surcharge or premium for access to the regime, as occurs in Peru – could theoretically offset the fiscal impact and make invariability fiscally neutral. However, such a measure would likely reduce the attractiveness currently needed to capture new long-term investment.

The evidence, while not unique, together with various historical factors, seems to show that repealing DL 600 was a mistake, mainly because Chile bet on a prosperity and stability that did not endure over time. At the time, a report by Consejo Minero (the mining association representing large mining companies) warned that the repeal created competitive disadvantages for Chile compared with countries such as Peru, Colombia, South Africa, Canada, Indonesia, Australia and the United States in attracting foreign mining investment. In addition,

foreign investors lost the administrative appeal mechanism for discrimination claims that DL 600 had provided.

However, that repeal, combined with a degree of institutional instability that gradually emerged over time – especially over the last five years – suggests that today an invariability statute could be a relevant instrument for restoring the legal certainty that needs to be reestablished.

BNamericas: Which sectors should be prioritized and what should the timelines be?

Diego Fuensalida: Looking at international comparisons, one would probably conclude that infrastructure, mining, tourism, technology, steelmaking, energy and other natural resource industries such as oil and gas have all been eligible for invariability statutes.

For Chile specifically, the sectors with the strongest justification for receiving invariability would be mining (especially copper and lithium), renewable energy, long-term infrastructure, technology and advanced manufacturing.

Carolina Fuensalida: As we have mentioned previously, it is possible that differentiated timelines could be established following a thorough analysis of the needs and characteristics of the various industries or sectors to be included.

The government's new proposal offers invariability of the 35% Additional Tax rate for a period of 25 years for all investment projects exceeding US\$50mn, without specifying sectoral destination.

The apparent lack of sector differentiation and the uniformity of the timeline have generated considerable debate, as some argue that a 25-year period without distinguishing between sectors may be excessive for some industries and necessary for others. Nevertheless, the law could establish, for example, a maximum of three timeline categories rather than leaving the issue open or delegated to regulatory rules. The clearer, simpler and more objective the rules are, the more effective the instrument will be.

At the end of the day, the new invariability statute should seek to attract investors who need to find in Chile clear, objective, simple, stable and predictable rules so they can invest with a certain degree of


confidence that, regardless of the government in power, their investment will be protected from ongoing tax disputes, potential foreign exchange restrictions and even possible proposals for radical constitutional reforms.

(The original version of this content was written in Spanish)


About InvestChile

InvestChile is the public agency that promotes Chile as a destination for foreign direct investment in the global market, connecting the interests of foreign investors with the business opportunities the country offers. It provides specialized, free services that are aligned with the country's economic development policies.

The company develops all kinds of initiatives to inform, promote, coordinate, and encourage the inflow of Foreign Direct Investment (FDI) into the country, in addition to providing general information about Chile, its economic and social environment, its legal framework, and its policies on foreign investment, offering specific information on how to start a business, as well as the procedures and regulations that every investor must comply with in order to bring FDI into the country.

 **Sentiment** BETA

This article: Neutral



[Explore more news sentiment insights](#)